

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 7º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-7260-2019  
CARATULADO : MINERIA Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO  
LTDA./SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA  
REGION MET

Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veintiuno

**VISTOS:**

Que con fecha 21 de febrero de 2019, comparece don Luis Eduardo Arias Arrigada y don Gonzalo Alvarado Schott, abogados, en representación convencional de MINERÍA Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO LIMITADA en adelante indistintamente “Cerroalto”, todos con domicilio en calle Morandé 115, piso 5, comuna de Santiago, interponiendo demanda de reclamación de la multa administrativa en contra del SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITADA DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representado por El Consejo de Defensa del Estado, y este a su vez por su presidente, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, o quién legalmente le subrogue o reemplace, ambos con domicilio en Agustinas N° 1687, Santiago, por las razones de hecho y de derecho que expone.

Señalan que con fecha 18 de febrero de 2019 su representada fue notificada de la resolución de multa administrativa N° 191325 dictada en el sumario Sanitario 1813EXP320 dictado con fecha 23 de enero de 2019, por la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITADA DE LA REGIÓN METROPOLITANA, por un total de 180 U. T. M., equivalente al día de la presentación de la reclamación ante este tribunal a la suma de \$8.694.900.-.

Luego, reproducen la parte resolutive de la resolución impugnada, que señala: “*Sentencia*



Foja: 1

1.- *APLÍCASE a MINERA Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO LTDA, RUT 77968340-0 Representado por CRISTIAN EDUARDO CHARMER AGUIRRE, RUN 5752650-5 ANTES INDIVIDUALIZADO, una multa de 180 UTM. (Ciento ochenta Unidades Tributarias Mensuales) en su equivalente en pesos al momento de pago, el cual deberá efectuar en la Oficina de Recaudación ubicada en PASEO BULNES 194, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de notificación. La presente resolución tendrá mérito ejecutivo y se hará efectiva conforme a los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.*

2.- *FISCALÍCESE oportunamente por funcionarios de SALUD OCUPACIONAL el cumplimiento de las medidas decretadas en los números precedentes.*

3.- *ADVIÉRTESE que en caso de reincidencia podrá aplicarse hasta el doble de la multa.*

4.- *NOTIFÍQUESE la presente sentencia a MINERA Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO LTDA al domicilio del sumariado por algunas de las formas permitidas por la ley.*

5.- *COMUNICASE al sumariado que podrá interponer los siguientes recursos:*

a) *Reposición Recurso que deberá interponerse ante la misma institución que resuelve dentro de 5 días contados desde la notificación de la sentencia, plazo de carácter fatal.*

b) *Reclamación Judicial: Acción que deberá interponerse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, dentro de 5 días contados desde la notificación de la Sentencia, plazo de carácter fatal.” [sic].*

En cuanto a sus defensas, en primer término alegan la nulidad de la notificación de la Resolución Multa N° 191325 dictada con fecha el 23 de enero de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 45 de la ley 19.880. Al efecto, hacen mención al articulado en cuestión, el que menciona que “*Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquella que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo*”. Destacan que la notificación es nula de nulidad absoluta por ser contrario a la ley, en tal orden mencionan que la norma ya citada



Foja: 1

impone a los órganos de la administración el plazo legal y fatal de 5 días hábiles para notificar los actos administrativos de efectos individuales que dicte en el ejercicio de sus funciones.

Agregan que el legislador no determinó en forma expresa cuál es la sanción cuando es el propio Estado el que incurre en ilegalidad, y sería innecesario según lo señalado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Luego de indicar que la reclamada es un órgano de la administración del Estado, manifiestan que el acto administrativo Resolución N° 191325 fue notificado vencido el plazo fatal de 5 días establecido en el artículo 45 ya mencionado. Aseveran que por esta ilegalidad se genera la caducidad del acto administrativo que se reclama ya que siendo nula la notificación éste es inoponible a su representada. Exponen que el ejercicio de la potestad administrativa debe estarse a las reglas dadas por el legislador según lo consagra el artículo 2 de la Ley 18.575 y que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

Por último, estiman que la notificación efectuada fuera del plazo legal acarrea su nulidad y en consecuencia el contenido de la resolución no es oponible a la reclamante, debiendo así ser declarado dejándose sin efecto la multa recurrida en los presentes autos.

En subsidio de lo anterior, oponen las siguientes defensas en relación a las imputaciones realizadas por la reclamada.

En primer lugar, sostienen que las imputaciones objeto del reclamo no son efectivas y alega la falta de análisis de los descargos como de la prueba rendida. Exponen que las imputaciones hechas en el acta de fiscalización de fecha 10 de julio de 2018 no son efectivas y las cuales reproduce desde el punto 2.1 al 2.16, además de otros hechos constatados. Añaden que la autoridad en un breve fallo, no señala fundamento alguno, ni considera los elementos de convicción aportados, aplicando la multa dándole sólo mérito al acta de fiscalización ya citada. Reseñan que la reclamada utilizó un borrador tipo sin analizar la prueba aportada, actuando como juez y parte, no respetando el debido proceso.

Seguidamente, se hacen cargo de la imputación de que la empresa no adopta las medidas que le prescribe el Organismo Administrador de la Ley



Foja: 1

16.744 para Sílice. Al efecto, mencionan que esta afirmación no es afectiva, ya que de acuerdo al Informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 de fecha 08 de mayo de 2018 suscrito por Organismo Administrador en su punto N° 3 (Medidas de Prevención y Control) y Evaluación Cuantitativa N° 1428710 de fecha 14 de junio de 2018 emitido por Organismo Administrador en su punto N°4 (Medidas de Control), las medidas prescritas para disminuir el nivel de riesgo han sido implementadas cumpliendo los plazos señalados por informes mencionados anteriormente.

Afirman que lo expuesto se acreditó mediante el acompañamiento de los siguientes informes: informe ACHS cualitativo N°1430100 (Anexo I), informe ACHS cuantitativo N° 1428710 (Anexo II), informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1513959. (Anexo III) y el Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1504472 (Anexo IV). No obstante lo anterior, mencionan que estos antecedentes no fueron considerados por la autoridad administrativa en la resolución de multa reclamada.

Luego, en relación a la imputación de que no se ha evaluado la eficiencia del control ingenieril en la fuente, manifiesta que ésta no es efectiva, toda vez que según las medidas ingenieriles mencionadas en el informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 emitido por Organismo Administrador en punto N°3 Medidas de Prevención y Control e informe de Evaluación Cuantitativa N° 1428710 emitido por Organismo Administrador en su punto N°4 Medidas de Control Técnicas emitido por Organismo Administrador, estas se encuentran dentro de los plazos establecidos. Enfatiza que para efectuar una re-evaluación que mida la eficiencia de las medidas de control ingenieril, se debe cumplir hasta la última de ellas y que estas medidas tienen fijado como plazos máximos de un año para las medidas establecidas en informe de Evaluación Cualitativa teniendo fecha de revisión para el día 08 de mayo de 2019 y de seis meses para medidas establecidas en informe Evaluación Cuantitativa teniendo fecha de revisión para el día 14 de diciembre de 2018. Agregan que su representada se encuentra en proceso de implementación de las medidas ingenieriles establecidas, y que esto lo acredita mediante los siguientes informes: Informe ACHS cualitativo N°1430100 (Anexo I), Informe ACHS



**Foja: 1**

cuantitativo N° 1428710 (Anexo II), Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1513959. (Anexo III), Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas, N° 1504472 (Anexo IV), informe Técnico de aplicación de medidas de control de Sílice y Ruido en CERROALTO, faena Arenex, realizado por Patricio Valdivia. Ante esto, reitera estos antecedentes no fueron considerados por la autoridad administrativa en la resolución multa recurrida.

Posteriormente, respecto a la denuncia que no se presenta evidencia de la efectividad de los controles administrativos para Sílice, aseveran que esta imputación no es efectiva y que su representada ha implementado las medidas administrativas señaladas en Informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 y en informe de Evaluación Cuantitativa N° 1428710 emitidos por Organismo Administrador. Añaden que su representada ha implementado las medidas administrativas prescritas teniendo en cuenta los plazos establecidos, obteniendo a la fecha un porcentaje de cumplimiento en las medidas administrativas prescritas en informe de evaluación cuantitativas de un 69%, según informe de Verificación y Control, Higiene ocupacional N°1504472. No obstante lo anterior, destacan que la reclamante se encuentra en proceso de implementación de las medidas administrativas que aún se encuentran en plazos para su cierre efectivo al 100%. Afirman que estos hechos se acreditaron mediante los informes acompañados en su oportunidad, que no fueron considerados en su oportunidad, que consisten, a saber: Informe ACHS cualitativo N°1430100 (Anexo I), informe ACHS cuantitativo N° 1428710 (Anexo II), informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1513959. (Anexo III) e informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1504472 (Anexo IV).

En cuanto a la argumentación de que no se realizó la capacitación teórico práctico de la protección respiratoria, aseveran que esta observación no es efectiva, atendido que la capacitación teórico práctica se realizó a los trabajadores cumpliendo con los plazos establecidos por Organismo Administrador, abordando las temáticas Uso, mantención, almacenamiento, inspección y pruebas de ajuste de la protección respiratoria de acuerdo a lo establecido en Instructivo de Prueba de Ajuste Equipo Protección



**Foja: 1**

Respiratoria Código I-GEN-SGS-01. Agregan que se acompañaron en su oportunidad los siguientes antecedentes: Informe ACHS cualitativo N°1430100 (Anexo I), Registros de difusión a trabajadores faena CERROALTO en Arenex, Instructivo I-GEN-SGS-01, Registros Fotográficos de capacitación, Muestra de Chequeo de Prueba de Ajuste Diario e informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1513959 (Anexo III).

En relación a la imputación que señala que la empresa no informa al organismo administrador, la implementación de controles o cambios de procesos, maquinarias o materias primas para una re-evaluación de la exposición a Ruido, sostienen que ésta no es efectiva, debido a que Cerroalto faena Arenex no presenta cambios en sus procesos, maquinarias o materias primas. En cuanto al punto de re-evaluación de la exposición a ruido, mencionan que según informe de evaluación cuantitativa N°1381278 de fecha 01 de Junio de 2018, respecto de las medidas ingenieriles se establece en punto 3.1 que no se entregaran medidas ingenieriles debido a que maquinarias y equipos utilizados requieren de revisión periódica. Respecto a las medidas administrativas prescritas por el Organismo Administrador, señalan que es importante señalar que se encuentran dentro de los plazos establecidos, en consecuencia, para efectuar una re-evaluación se debe cumplir hasta la última de ellas. Aclaran que las medidas administrativas, tienen fijado el plazo de 6 meses para su implementación de acuerdo con el informe citado y que el plazo vencería el 01 del mes de diciembre del año 2019. Reiteran que su representada ha implementado las medidas administrativas prescritas teniendo en cuenta los plazos establecidos, obteniendo a la fecha un porcentaje de cumplimiento de un 88% según informe de Verificación y Control, Higiene ocupacional N°15044343. Destacan que estos actos están acreditados con los antecedentes que se acompañaron en el sumario reseñado, que consisten en: informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) e informe de verificación y control higiene ocupacional N° 1504343 (Anexo VI).

Respecto al descargo que la empresa no cuenta con informe genérico de los resultados del programa de vigilancia de Salud, indican que esta afirmación no es efectiva. En efecto, arguyen que Cerroalto faena Arenex



**Foja: 1**

cuenta con informe genérico de resultados del Programa de Vigilancia de la Salud, emitido por Organismo Administrador, en el cual se encuentra la Nómina de trabajadores a evaluar en vigilancia de la Salud, situación administrativa y fechas de próximo control. Como modo de prueba, exponen que se acompañó en su oportunidad el Informe Genérico Vigilancia de Salud por Exposición a: Ruido (estable y fluctuante).

En cuanto a la imputación de que no se ejecutan las medidas dentro de los plazos definidos por PREXOR, aseguran que tampoco es efectivo, según lo dispuesto en el punto 7.1.4.2 del Protocolo de Vigilancia de exposición ocupacional al ruido, que reproduce. Añaden que de acuerdo al informe cuantitativo N° 1381278 de fechas junio de 2018 en su punto 4.5.3 sobre exposición ocupacional, señala en tabla N°8 Resultados, conclusiones y acciones a seguir para cada puesto de trabajo evaluado, estableciendo el plazo máximo de un año para implementar medidas de control, no obstante aquello, la reclamante ha implementado las medidas de control prescritas por Organismo administrador teniendo un resultado global como empresa de un 94% y las medidas aún no cerradas se encuentran dentro de los plazos establecidos. Explican que este punto de acreditó en el sumario mediante los siguientes documentos: informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) e informe de verificación y control higiene ocupacional N° 1504343 (Anexo VI).

En relación a la afirmación que no se controla la exposición mediante alguna medida ingenieril de la(s) fuente(s) de ruido, en el camino de la propagación ni en el entorno, manifiestan que no es cierto, de acuerdo al punto 3.1 del Informe de Evaluación Cuantitativa N° 1381278 de fecha junio de 2018, ya que su representada ha implementado las medidas administrativas prescritas teniendo en cuenta los plazos establecidos, obteniendo a la fecha un porcentaje de cumplimiento de un 88% y en cuanto a las medidas de protección personal auditiva un porcentaje de cumplimiento del 100%, según informe de Verificación y Control, Higiene Ocupacional N°1504343. Agregan que sin embargo, Cerroalto evaluará factibilidad de medidas de control tipo ingenieril que puedan aplicarse para controlar las fuentes de ruido en la operación. Destacan que estos hechos se acreditaron mediante el informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) y el



**Foja: 1**

informe de verificación y control higiene ocupacional N° 1504343 (Anexo VI).

Respecto a la observación que no existe un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril para Ruido, afirman que no es efectivo, atendido lo indicado en el punto 3.1 del Informe de Evaluación Cuantitativa N° 1381278 de fecha junio de 2018 y al no ser viable la aplicación de medidas ingenieriles, no es necesario un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril para ruido. Explican que esto se probó mediante el informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) que se ofreció en su oportunidad.

En cuanto a la afirmación que no presenta evidencia de la efectividad de los controles administrativos para Ruido, destacan que de acuerdo al informe de Evaluación Cuantitativa N° 1381278 de fecha junio de 2018 emitido por Organismo Administrador en su punto N° 3 (Medidas Administrativas), su representada ha implementado las medidas administrativas prescritas teniendo en cuenta los plazos establecidos, obteniendo a la fecha un porcentaje de cumplimiento en las medidas administrativas prescritas en informe de evaluación cuantitativas de un 88%, según informe de Verificación y Control, Higiene ocupacional N°1504343. No obstante lo anterior, manifiestan que Cerroalto se encuentra en proceso de implementación de las medidas administrativas que aún se encuentran en plazos para su cierre efectivo al 100%. Aseveran que esto se acreditó en sus descargos mediante el informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) e informe de verificación y control higiene ocupacional N° 1504343 (Anexo VI).

En relación a la imputación que no cuenta con la gestión de los Elementos de Protección Auditiva de acuerdo con las Guías del ISP, indican que no es efectiva, debido a que la reclamante cuenta Programa de Protección de Elementos de Protección Auditiva desarrollado de acuerdo con lo establecido en las Guías del ISP. El documento con el que se le da cumplimiento al requisito es “P-GEN-SGS-09 Programa de Protección Auditiva”, y sus registros asociados. Explican que estos hechos se acreditaron con los siguientes antecedentes, a saber: P-GEN-SGS-09 Programa de Protección Auditiva, R-GEN-SGS-29 Ficha de Adquisición de





**Foja: 1**

Equipo de Protección Auditiva, R-GEN-SGS-30 Control y Entrega de Equipo de Protección Auditiva, R-GEN-SGS-31 Control de Equipo de Protección Auditiva y Muestras aleatorias de documentos realizados en terreno.

Respecto a la afirmación que no se proporcionan Elementos de Protección Personal adecuados a los requisitos, características y tipos que exige el riesgo Ruido, manifiestan que no es cierta, atendido que la empresa ha entregado los elementos de protección auditiva adecuados para proteger la audición de los trabajadores, según lo indica el punto 4.5.6 letra d) del Informe de Evaluaciones Cuantitativas de Ruido de ACHS N° 1381278. Añaden que de acuerdo al informe de verificación y control Higiene Ocupacional N°1504343, la reclamante cumple al 100% las medidas de protección personal. Sostienen que esto quedo confirmado con los siguientes antecedentes que fueron acompañados en su oportunidad: Hoja Técnica 3M Peltor Optime II, Resolución de inscripción en el registro de fabricantes e importadores de Elementos de protección personal del ISP, Muestra de Ficha de entrega y control equipo de protección auditiva, informe cuantitativo N° 1381278 (Anexo V) e informe de verificación y control higiene ocupacional N° 1504343. (Anexo VI).

En cuanto a la observación que no se realizó capacitación teórico práctica sobre la protección auditiva de acuerdo a la Guía del ISP, afirman que no efectiva. Destacan que Cerroalto realizó a sus trabajadores capacitación teórico práctica de acuerdo a las guías del ISP, abordando los siguientes temáticos: Programa de Protección auditiva, ajuste de orejera, uso correcto y mantenimiento protector auditivo. Añaden que esto consta de acuerdo a los registros de difusión a trabajadores faena CERROALTO en Arenex y los registros Fotográficos de capacitación, que se acompañaron en su oportunidad.

En relación a la imputación que la empresa no realizó capacitación sobre los efectos de la salud que produce el ruido ocupacional, las medidas preventivas ni los métodos de trabajo correctos, mencionan que esta afirmación es falsa. Al efecto, sostienen que su representada dentro de las capacitaciones relacionadas con referencia a protocolo PREXOR, realizó difusiones y capacitaciones de diversas temáticas, entre las cuales destacan:



**Foja: 1**

Efectos de la salud producto de la exposición, Medidas preventivas y Métodos de trabajo correcto, en las cuales abarca los temas mencionados en este cargo. Afirman que este hecho fue acreditado mediante el acompañamiento en el sumario respectivo de los Registros de difusión a trabajadores faena CERROALTO en Arenex.

Respecto a la observación que no se realizó la difusión del protocolo a los Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sindicatos ni trabajadores con exposición a Ruido, aseveran que no es cierto. Arguyen que la reclamante no sobrepasa los 25 trabajadores por lo que no tiene obligación legal de contar con Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Asimismo, señalan que existen sindicatos en dicha faena y con referencia a trabajadores expuestos, el protocolo Prexor, fue correctamente difundido y dicha difusión se entregó a Seremi de Salud e Inspección del trabajo. Aclaran que estos hechos fueron probados por los siguientes documentos que se acompañaron en su oportunidad: Capacitación de Protocolo Prexor a trabajadores, Actas de entrega a Seremi de Salud y Acta de entrega a Inspección del trabajo.

En cuanto a la afirmación que la empresa no informó a los trabajadores y Comité Paritario de Higiene y Seguridad ni Sindicatos de los resultados de las evaluaciones cuantitativas de Ruido, exponen que es efectiva, reiterando la misma fundamentación expuesta anteriormente. Este hecho lo acreditó mediante el documento denominado Capacitación de Resultados de evaluaciones cuantitativas a trabajadores, que se acompañó en su oportunidad.

Posteriormente, hacen mención a otros hechos constatados, tales como: a) Falta Implementar medidas de control ingenieril en salida polvo roca de la planta; b) Falta implementar señaléticas en la planta acerca del riesgo de exposición al agente sílice y uso de Elemento de Protección Respiratoria; c) Falta implementar señaléticas de prohibición de ingreso de personal no autorizado a la zona de planta de chancado; d) Falta implementar Programa de Protección Respiratoria y su Difusión a todos los trabajadores, además debe evidenciar pruebas de ajustes realizadas, según método seleccionado en instructivo de prueba de ajuste; e) Falta realizar difusión a los trabajadores acerca programa de protección auditiva presentado; f) Falta realizar difusión del PREXOR a los trabajadores de la



Foja: 1

planta; g) Falta implementar Sistema de Gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido; y h) Falta implementar zonas de descanso, debidamente señalizadas y sistemas de rotación.

En relación a la primera imputación, explican que ésta no es cierta, ya que de acuerdo a las medidas ingenieriles señaladas en informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 emitido por Organismo Administrador en punto N°3 Medidas de Prevención y Control e informe de Evaluación Cuantitativa N° 1428710 emitido por Organismo Administrador en su punto N°4 Medidas de Control Técnicas emitido por Organismo Administrador, destacan que todas estas se encuentran dentro de los plazos establecidos. Ante esto, mencionan que su representada abordado la implementación de las siguientes medidas de control ingenieril: privilegiar el monitoreo de la planta por medio de cámaras que permitan detectar el lugar de trabajo, reduciendo la necesidad de que el personal deba concurrir a inspeccionar y/o controlar sistemas ubicados en lugares contaminados de la faena y aumentar humectación cuando sea posible, sobre todo considerando los procesos de chancado y traslado de material por cintas transportadoras. Agregan que estos hechos se acreditaron los siguientes antecedentes acompañados en su oportunidad, a saber: informe ACHS cualitativo N°1430100 (Anexo I), informe ACHS cuantitativo N° 1428710 (Anexo II), informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativa N° 1513959. (Anexo III) e Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional cuantitativas N° 1504472 (Anexo IV).

Respecto a la segunda observación, manifiestan que esta afirmación no es efectiva, toda vez que la reclamante implementó las señaléticas requeridas, y éstas se encuentran debidamente instaladas al interior de Planta identificando el riesgo de exposición al agente sílice y el uso de Elementos de Protección Respiratoria. Al efecto, mencionan que esto se acredita con el Registro Fotográfico de señaléticas instaladas en planta, que aparejaron en su oportunidad.

En cuanto a la tercera afirmación, manifiestan que esta no es cierta, reiterando los mismos antecedentes mencionados anteriormente, agregando que las señaléticas se encuentran debidamente instaladas identificando la prohibición de ingreso de personal no autorizado y que esto fue acreditado



Foja: 1

mediante el Registro Fotográfico de prohibición de ingreso de personal no autorizado, que fue acompañado en su oportunidad.

En relación a la cuarta imputación, señalan que el “Programa de Protección Respiratoria” P-GEN-SGS-11 y el Instructivo asociado de “Prueba de Ajuste Equipo Protección Respiratoria” I-GEN-SGS-01 han sido implementados y difundidos. Destacan que las pruebas de ajuste han sido registradas en “Chequedo de Prueba de Ajuste Diario “R-GEN-SGS-35” de acuerdo a lo establecido en instructivo de “Prueba de Ajuste Equipo Protección Respiratoria” I-GEN-SGS-01. Añaden que medidas de protección personal se encuentran cumplidas de acuerdo a lo establecido en informes de Verificación y Control Higiene Ocupacional Cualitativo N° 1513959 y Cuantitativo N°1504472. Exponen que esto se acreditó mediante los siguientes documentos que se aparejaron en su oportunidad: “Programa de Protección Respiratoria” P-GEN-SGS-11, “Difusión de Programa de Protección Respiratoria”, “Prueba de Ajuste Equipo Protección Respiratoria” I-GEN-SGS-01, “Chequeo de Prueba de Ajuste Diario” R-GEN-SGS-35, Registro Fotográfico de Pruebas de ajuste, Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativo N° 1513959 (Anexo III) e Informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional cuantitativas N° 1504472 (Anexo IV).

Respecto a la quinta observación, aseguran que ésta no es efectiva, por cuanto la difusión del “Programa de Protección Auditiva” PGEN-SGS-09 fue realizada y que consta mediante el antecedente ya acompañado en su oportunidad y que consiste en la Difusión de Programa de Protección Auditiva.

En cuanto a la sexta imputación, enfatizan que no es cierta, atendido que la reclamante realizó correctamente la difusión de PREXOR y dicha difusión se entregó a Seremi de Salud e Inspección del trabajo y que se encuentra probada mediante la siguiente documentación: Capacitación de Protocolo Prexor a trabajadores expuestos, Actas de entrega a Seremi de Salud y Acta de entrega a Inspección del trabajo.

En relación a la séptima observación, destacan que es falsa, toda vez que Cerroalto ha implementado Sistema de Gestión para la Vigilancia de los Trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a Ruido P-GENSGS-08, el



**Foja: 1**

cual fue entregado a la SEREMI de Salud. Sostienen que esto quedó demostrado mediante el aporte de la documentación, que consiste en: Sistema Gestión de Vigilancia de los trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a Ruido código P-GEN-SGS-08 y Actas de entrega a Seremi de Salud.

Respecto a la octava afirmación, aclaran que esta afirmación es falsa, atendido que la reclamante implementó sala de descanso y según Procedimiento de Monitoreo Planta de Chancado P-ARE-CHA-02, especifica que el personal de mantención debe permanecer en sala de descanso esperando instrucciones en caso de avería, manteniendo en todo momento y de carácter obligatorio puertas y ventanas cerradas de oficinas, sala de control y descanso, con la finalidad de disminuir la posibilidad de exposición de agente sílice y ruido. Indican que en caso de producirse algún desperfecto durante el funcionamiento de la operación normal de la planta, el supervisor dará aviso a personal de mantención para que puedan concurrir a evaluar en terreno y realizar una inspección visual de no más de 30 minutos, siempre equipado con todos sus EPP. Expresan que esto quedó acreditado mediante los siguientes antecedentes: Procedimiento de Monitoreo Planta de Chancado P-ARE-CHA-02 y Registro Fotográfico de Sala de Descanso señalizada.

Afirman que no siendo efectivas todas las imputaciones descritas, la reclamación deberá ser acogida.

Seguidamente, mencionan que no están acreditados los hechos de la sanción y que no existe responsabilidad de la reclamante. En efecto, hacen mención a lo dispuesto en el artículo 171 inciso segundo del Código Civil, para destacar que aunque su representada presentó abundante prueba correspondiente a las observaciones originadas al acta de la Secretaria Regional de Salud Región Metropolitana, estas no fueron consideradas en la resolución impugnada. Insisten que todas las imputaciones son improcedentes ya que no se encuentran comprobadas y que existe prueba abundante que la reclamante ha cumplido cabalmente y en forma planificada, previa y exhaustivamente la identificación de los riesgos laborales, su evaluación y análisis, para establecer las medidas que eliminen



**Foja: 1**

los peligros y riesgos laborales o que los reduzcan al mínimo, cumpliendo a cabalidad con la normativa laboral vigente.

Luego, exponen que la multa de 180 UTM resulta excesiva conforme a los cargos imputados y que no existe ninguna proporcionalidad. Aseveran que existen numerosos casos de multas similares donde las multas no exceden las 10 a 20 UTM, por lo que la multa impuesta no guarda ninguna racionalidad.

Más adelante, solicitan la aplicación del derecho penal al derecho administrativo y alegan no haber imputación clara de la infracción cometida. Mencionan que la autoridad no indica claramente y textualmente cuáles serían las infracciones reglamentarias cometidas y que la sentencia reclamada es genérica, pudiendo servir para sancionar a su representada, sin que exista una conducta típica. Asimismo, citan lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 7° y 8° de la Constitución Política de la República, para indicar que la resolución que aplica una multa por la comisión de una infracción sanitaria debe indicar cuál es específicamente la disposición legal que sanciona la presunta infracción y en qué texto está descrita la situación infraccional, no bastando con indicar que la multa obedece a una “infracción al Código Sanitario” señalando su articulado.

Después de reproducir las normas citadas en la resolución impugnada, manifiestan que aunque el artículo 174 del Código Sanitario instituye de manera general sanciones a la infracción de “cualquiera de las disposiciones del Código”, entre las normas citadas por la autoridad sanitaria de la resolución que impone la multa no se encuentra descrita la conducta constitutiva de la infracción ni determinada la ley que la contempla, afectando tanto la garantía del debido proceso como el derecho a la debida defensa. En el mismo sentido, cita la opinión de los autores Politoff, Matus y Ramírez de su libro “En Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte General” y el resuelto por la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 1522-2004 de fecha 29 de septiembre de 2004. Señalan, además, que en relación con el Derecho Administrativo Sancionador, hacen presente lo pronunciado por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago en los autos rol N° 2078-2005, de fecha 15 de diciembre de 2006.



Foja: 1

Por último, exponen que el acto administrativo impugnado infringe el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre procedimiento administrativo, pues de la sola lectura de la resolución multa recurrida queda clara la manifiesta falta de fundamento de la sanción impuesta a mi representada. Al efecto, citan lo dispuesto en los artículos mencionados señalando que la Resolución multa recurrida N° 191325 no es fundada, debido a que sólo se limita a señalar cuales habrían sido las imputaciones de acta de inicio de sumario sanitario, sus descargos, los artículos de las normas de las normas supuestamente infringidas, sin hacer un análisis de los descargos, de la prueba rendida, ni fundamentar por que rechaza los descargos, ni menos exponer en mérito de que razonamiento o fundamentación aplica la multa recurrida. Agregan que la motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República y en el artículo 11 inciso 2 de la Ley 19.880 siendo reiterado en el artículo 41 inciso 4 del mismo cuerpo legal.

Solicitan, por tanto, dejar sin efecto el acto administrativo de notificación de la Resolución Multa N°191325 de fecha 29 de enero de 2019, dictada en el expediente sanitario 1813EXP320 y en consecuencia inoponible a la Minería y Construcciones Cerro Alto. En subsidio, pide dejar sin efecto la multa interpuesta y/o se sirva rebajar prudencialmente la multa conforme a lo expresado en el cuerpo de esta presentación, con costas.

Con fecha 28 de marzo de 2019, se notificó a la reclamada de autos.

Con fecha 03 de abril de 2019, se celebró el comparendo de contestación y conciliación, en el que el demandado evacuó su contestación por medio de minuta escrita que se encuentra agregada al sistema computacional.

Con fecha 08 de abril de 2019, se recibió la causa a prueba, notificándose la interlocutoria con fecha 02 y 23 de septiembre de 2019.

Con fecha 15 de abril de 2020, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:**



Foja: 1

**PRIMERO:** Que con fecha 12 de noviembre de 2019 la parte reclamada formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, con costas, respecto del testigo Julio Norman López Guerrero, toda vez que el legislador ha considerado que los trabajadores dependientes de la parte que los presenta como testigos en el juicio no cuentan con la imparcialidad necesaria para entregar su testimonio, en virtud del vínculo de subordinación y dependencia. Señala que el testigo ha señalado una relación de 3 años y aclara que esta empresa es la que paga sus remuneraciones.

En cuanto a la causal N° 6, manifiesta que el testigo ha señalado que las asesorías que presta a la reclamante tienen relación con los hechos que han motivado la multa del presente juicio. Añade que esto último implica que este tiene un interés directo actual y pecuniario en el resultado del juicio, atendido que su desempeño de su función podría verse menoscabada o ser objeto de crítica, dependiendo del resultado de este;

**SEGUNDO:** Que evacuando el traslado conferido la reclamante solicitó el rechazo de la tacha formulada, atendido que el testigo señaló expresamente que prestaba asesorías externas a una empresa diferente a la demandante, por lo cual no existe relación de dependencia y subordinación, existiendo solo un vínculo comercial que no reflejaría la existencia de un interés en el resultado del juicio;

**TERCERO:** Que, no obstante que nuestro ordenamiento jurídico ofrece garantías a los trabajadores para que estos puedan declarar libremente en aquellos juicios en que sus empleadores puedan llegar a tener intereses comprometidos, se ha de rechazar la inhabilidad intentada pues como se desprende de los dichos del propio testigo no posee relación laboral con la parte que lo presenta. Seguidamente, también se desechará la tacha contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en tanto este tribunal no vislumbra que concurra a su respecto el interés a que alude el precepto;





Foja: 1

**CUARTO:** Que con fecha 12 de noviembre de 2019 la parte reclamada formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, con costas, respecto del testigo Kevin Aarón Báez Valenzuela, atendido que el legislador ha considerado que los trabajadores dependientes de la parte que los presenta como testigos en el juicio no cuentan con la imparcialidad necesaria para entregar su testimonio, en virtud del vínculo de subordinación y dependencia.

Agrega que el testigo ha señalado expresamente que presta servicios de asesoría a la parte reclamante y que ésta ligado a esta por un contrato de trabajo indefinido regulado por el Código Laboral. Expone que el testigo, al verse enterado de su obligación de venir a declarar por medio de lo que expresa como una reunión de la empresa, es una muestra que el testigo no cuenta con la independencia e imparcialidad necesaria.

En relación a la causal N° 6, asevera que el testigo ha mencionado que las asesorías que presta a la reclamante tienen relación con los hechos que han motivado la multa del presente juicio. Sostiene que esto último implica que este tiene un interés directo actual y pecuniario en el resultado del juicio, atendido que su desempeño de su función podría verse menoscabada o ser objeto de crítica, dependiendo del resultado de este;

**QUINTO:** Que evacuando el traslado conferido la reclamante solicitó el rechazo de la tacha formulada, manifestando que la jurisprudencia ha señalado que no es suficiente como tacha que preste servicios a una empresa ya que la legislación laboral lo protege ante eventuales presiones de su testimonio. Añade que el testigo no ha señalado tener un interés en el resultado del juicio, el cual le es indiferente;

**SEXTO:** Que, compartiendo los argumentos de la parte demandante se desechará la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 5° del citado artículo 358, por cuanto nuestra legislación laboral otorga garantías para que los trabajadores puedan declarar en juicios en que sus empleadores vean sus intereses eventualmente comprometidos. De la misma forma, por no advertirse que el testigo posea un interés, con lo que se resuelva en este



Foja: 1

juicio, como el requerido en el numeral 6 de la citada disposición, se rechazará también esta causal de inhabilidad;

**SÉPTIMO:** Que con fecha 12 de noviembre de 2019 la parte reclamada formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, con costas, respecto del testigo Leonardo Daniel Quiroga, debido a que el legislador ha considerado que los trabajadores dependientes de la parte que los presenta como testigos en el juicio no cuentan con la imparcialidad necesaria para entregar su testimonio, en virtud del vínculo de subordinación y dependencia.

Afirma que el testigo ha señalado expresamente que ésta ligado a esta por un contrato de trabajo y que desempeña funciones respecto del sistema de gestión y verificación de cumplimiento de las faenas de la empresa, regulado por el Código Laboral. Explica que esta relación se ha mantenido desde octubre del año 2017 hasta la fecha y es ésta empresa también quien paga sus remuneraciones, siendo su único empleador;

**OCTAVO:** Que evacuando el traslado conferido la reclamante solicitó el rechazo de la tacha formulada, indicando que la jurisprudencia ha señalado que no es suficiente como tacha que preste servicios a una empresa ya que la legislación laboral lo protege ante eventuales presiones de su testimonio. Agrega que el testigo no ha señalado tener un interés en el resultado del juicio y que cuenta con contrato indefinido que no ésta sujeto al resultado del juicio y a los hechos fundantes;

**NOVENO:** Que, trayendo a colación los argumentos entregados en el fundamento sexto de esta sentencia, a propósito de la causal de tacha establecida en el numeral 5, se procederá también a su rechazo;

## **II.- EN CUANTO AL FONDO:**

**DÉCIMO:** Que comparecen don Luis Eduardo Arias Arriagada, y Gonzalo Alvarado Schott, en representación convencional de MINERÍA Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO LIMITADA, interponiendo demanda de reclamación de la multa administrativa en contra del



Foja: 1

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
METROPOLITADA DE LA REGIÓN METROPOLITANA,  
representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, por las razones de  
hecho y de derecho que expuso;

**UNDÉCIMO:** Que doña Ruth Israel López, abogada Procurador  
Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por la reclamada  
contestó, solicitando el rechazo de la de la reclamación por las siguientes  
consideraciones de hecho y de derecho:

Primeramente, hace mención al Acta de Inspección de fecha 10 de  
julio de 2018, folio 1813E02613, suscrita por funcionario fiscalizador de la  
Secretaria Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, doña Claudia  
Marcela Cáceres Sandoval, que se constituyó en visita inspectiva en Minería  
y Construcciones Cerro Alto Ltda., ubicada en Parcela 15, comuna de San  
Bernardo, y los distintos hechos que fueron constatados en aquella en razón  
de fiscalización para Sílice y ruidos en los lugares de trabajo. Asimismo,  
señala se da inicio al sumario sanitario y se cita a don Cristian Eduardo  
Charmer Aguirre, el día 25 de julio de 2018, a las 11:00 horas, para que  
comparezca a con todos los medios probatorios, pudiendo traer sus  
descargos, los que reproduce seguidamente.

Manifiesta que encontrándose en estado de fallo, la reclamada con  
fecha 23 de enero de 2019 dictó la Resolución Sancionatoria N° 191325, en  
la cual se estableció que los hechos constatados, constituyen infracción a lo  
dispuesto en: Art. 53°, D.S. 594/99 MINSAL ART.21 D.S. 40/69  
MINTRAB; Art. 65° BIS D.S. 594/99 MINSAL; Art. 68° LEY 16744/68  
MINTRAB; RES. EXT 268-2015 MINSAL; Art. 36, D.S. 594/99;  
NORMA TÉCNICA N° 156-2013, MINSAL DTO° 1052 MINSAL; Art.  
53°, D.S. 594/99 ART 21 D.S. 40/69 NORMA TECNICA N° 156-2013,  
MINSAL DTO N° 1052 MINSAL; Art. 21 Y 11 D.S. 40/69 NORMA  
TECNICA N° 156-2013 MINSAL DTO N° 1052 MINSAL; y Art. 3, 37 Y  
57, D.S. 594/99. Agrega que se le aplicó a Minera y Construcciones Cerro  
Alto Ltda., una multa de 180 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), así  
como se le advierte que en caso de reincidencia se podrá aplicar el doble de



Foja: 1

multa. Expone que la sentencia fue entregada a la sumariada el 18 de febrero de 2018.

Posteriormente, la reclamada controvierte expresa y formalmente los hechos alegados en la reclamación, aceptándose sólo aquellos que sean reconocidos de modo expreso en su contestación.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción de reclamación interpuesta. Al efecto, afirma que de acuerdo al artículo 166 del Código Sanitario, el acta levantada por el funcionario competente tiene carácter de plena prueba y que la reclamante no acompañó antecedentes capaces de desvirtuar los hechos claramente establecidos en el sumario sanitario, y especialmente, en el acta de inspección. En el mismo sentido, cita lo dispuesto en el artículo 171 del Código recién mencionado para destacar las razones por la cual el tribunal desechará la reclamación. Sostiene que los hechos que han motivado la sanción se encuentran plenamente comprobados en el sumario sanitario instruido en conformidad a las normas del Código Sanitario. Insiste que los fundamentos de la reclamación presentada por la reclamante, no dicen relación con ninguno de los elementos del art. 171 del Código Sanitario, norma que da competencia a los tribunales de justicia para conocer de los asuntos ventilados en sede administrativa.

En segundo lugar, manifiesta que la alegación de la nulidad de la notificación es improcedente. Señala que este punto se debe tener presente el Principio de Conservación, el que se entiende como aquel principio *“garantizaría la conservación de todos aquellos actos que – con independencia de las posibles irregularidades en las que haya podido incurrir – (...) satisfagan todos aquellos fines que la norma que lo regula pretendía alcanzar con su emanación”*. Destaca que este principio exige la conservación de todos aquellos actos que sean capaces de cumplir su finalidad válidamente. Añade que mientras se cumpla con el fin u objetivo del acto administrativo, este va a subsistir a pesar de haber incurrido en ciertas irregularidades. Añade que la finalidad de la norma es ponerle un plazo prudente a los organismos del Estado para poner en conocimiento a los afectados, más no limitar todas las actuaciones administrativas a ello, ya



**Foja: 1**

que de lo contrario, y producto de la gran carga laboral a la cual están sujetas las instituciones de Estado, un gran número de actos se verían nulos.

A mayor abundamiento, hace presente el pronunciamiento de los dictámenes N° 47.104/2001, 23.632/ 2006 y 3.704/2014 de la Contraloría General de la República, en los cuales se indica que los plazos conferidos a la Administración para emitir determinados actos, no son fatales, de modo que el proceso disciplinario de que se trata, no se invalida por el hecho de la eventual demora, pues tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Seguidamente, cita lo dispuesto en el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.880.- para recalcar la presunción de legalidad que gozan los actos administrativos. Menciona, no obstante, que La aplicación de la presunción no significa en modo alguno que los actos administrativos no sean impugnables, sino que coloca al tribunal un estándar de exigencia más alto a la hora de examinar la denuncia de los supuestos vicios alegados, exigiendo al demandante la acreditación y justificación plena respecto a la concurrencia del supuesto vicio. Por último, alega que el acto administrativo se reputa válido mientras no se compruebe fehacientemente un vicio grave que ocasione perjuicio y, ante la duda, deberá primar la validez por sobre la anulación;

**DUODÉCIMO:** Que, según lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta;

**DÉCIMO TERCERO:** Que con el fin de acreditar sus pretensiones, el reclamante acompañó la siguiente prueba documental:

1.- Copia simple de la Resolución N° 191325, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana en el sumario 1813EXP320, de fecha 23 de enero de 2019.

2.- Mandato Judicial, suscrito ante el Notario Público don Eduardo Avello Concha, de fecha 26 de junio de 2018.



Foja: 1

3.- Copia simple del documento denominado “ACTA DE INSPECCIÓN” Folio 1813E02613, suscrita por la funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana doña Claudia Cáceres Sandoval, de fecha 10 de julio de 2018.

4.- Copia simple de los descargos efectuados por Cerroalto ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de fecha 25 de julio de 2018;

**DÉCIMO CUARTO:** Que, asimismo, la reclamante rindió prueba testimonial, haciendo comparecer en estrados a los siguientes testigos:

1.- Don Julio Norman López Guerrero, quien al tenor del punto N° 1 de la resolución que recibió la causa a prueba, declara que la resolución fue dictada en enero del año 2019 y la sanción les fue notificada un mes después, siendo que la ley indica un plazo de 5 días hábiles. Expone que una vez que analizaron la respuesta de la SEREMI, les dio la impresión de que no fueron revisados los antecedentes y que la explicación de la multa no detalla lo que ellos no dejaron de entregar.

En cuanto al punto N° 2, menciona que no están explícitas las infracciones que cometió la empresa para llegar a una multa tan elevada. Sostiene que se copió de otro sumario, ya que no cuentan con comité paritario y sindicado, mientras que la autoridad les decía que sí lo tenían. Destaca que la faena no cuenta con más de 25 trabajadores.

Respecto al punto N° 4, relata que no, ya que no se notificó en los plazos legales. Añade que como asesor le encomendaron formar el equipo de trabajo para realizar los descargos al sumario, recibiendo copia de la notificación de la multa en febrero del año 2019.

2.- Don Kevin Aarón Báez Valenzuela, quien al tenor del punto N° 4 de la interlocutoria de prueba, relata que no se cumplió, debido a que el acta se dictó el 23 de enero y fueron notificados el 18 de febrero de 2019.

3.- Don Leonardo Daniel Quiroga, quien al tenor del punto N° 1 del auto de prueba, declara que la fiscalización de parte de la SEREMI fue en julio del año 2018. Agrega que las infracciones señaladas no son efectivas, porque los requisitos eran cumplidos por la empresa. Asegura que estos hechos le constan ya que se lo comunicaron los asesores de prevención de riesgo de la faena.



Foja: 1

En relación al punto N° 2, manifiesta que hubo supuestamente hechos constatados, sobre los cuales hicieron los descargos. Menciona, por ejemplo, el hecho que no se implementaron las medidas prescritas por el organismo administrador, como capacitaciones, planes y prexos, los cuales si fueron hechas. Insiste que la notificación de la sanción fue hecha el día 18 de febrero de 2019, siendo esta fuera de plazo. Asevera que esto le consta, debido a que el acta llegó a su poder a través de asesores y que la notificación llegó a la oficina de Cerroalto, lugar donde trabaja;

**DÉCIMO QUINTO:** Que, por su parte, la reclamada rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Resolución Tra N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, de fecha 30 de agosto de 2017.

2.- Copia simple del Expediente N° 1813EXP320, emitido por la Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 25 de julio de 2018;

**DÉCIMO SEXTO:** Que, se tendrá como hecho de la causa, por no haberse controvertido, el siguiente:

1.- Que, con fecha 23 de enero de 2019, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, por medio de resolución exenta N° 191325, impuso a Minería y Construcciones Cerro Alto Limitada una multa de 180 UTM;

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, por medio de la interposición de esta acción el reclamante solicita dejar sin efecto la multa impuesta por Resolución N° 191325 de 23 de enero de 2019, dictada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, o en subsidio, que ésta sea rebajada. Como fundamentos de la reclamación, en primer lugar afirma que la aludida multa fue notificada fuera del plazo establecido en el artículo 45 de la Ley 19.880, convirtiéndola en una notificación nula y a la sanción en inoponible a su parte; en subsidio, postula que los hechos por los que se cursa la multa no son efectivos, ya que su parte habría dado cumplimiento a la normativa respectiva, además hace hincapié en que la resolución recurrida adolece de



Foja: 1

falencias, en tanto no aborda sus descargos, conformándose con simplemente transcribirlos;

**DÉCIMO OCTAVO:** Que para la resolución de la reclamación, se ha de tener presente lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, cuyo inciso segundo mandata que: “El Tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”. En consecuencia, la demandante debe probar que no se hayan acreditado los hechos establecidos en el sumario administrativo; que estos hechos no constituyen una infracción a las normas sanitarias o que la sanción aplicada no sea acorde a la infracción cometida;

**DÉCIMO NOVENO:** Que, previo al análisis de los elementos previstos en la disposición citada en el considerando que antecede se abordará solitud de nulidad de la notificación, petición fundada en que notificación de la resolución multa se efectuó pasado el 5° día de dictada, apartándose de aquella forma de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 19.880; al respecto, se dirá que esta solicitud es de carácter procesal, y como tal para prosperar requiere de la existencia de un perjuicio que sea sólo reparable con la declaración de nulidad, circunstancia que no sólo no es posible advertir por parte del tribunal, sino que además no es explicitada en el libelo, motivo suficiente como para desechar la demanda en este extremo.

Con todo, si atendemos a la sanción que el demandante pretende produzca la tardanza en la notificación de la multa, de igual forma se debiera rechazar una demanda amparada en este motivo, en atención a que si bien no es posible desconocer que de este hecho podría derivar algún tipo de responsabilidad funcionaria, de manera alguna el efecto podría ser hacer inoponible a su parte el acto notificado, por cuanto la sanción se extendería más allá del acto impugnado sin un fundamento legal, jurisprudencial o doctrinario que habilite a proceder en ese sentido;





Foja: 1

**VIGÉSIMO:** Que, como alegación subsidiaria corresponde referirse a los requisitos que de conformidad al artículo 171 del Código Sanitario hacen procedente el acogimiento de una demanda como la intentada. En tal orden, cabe zanjar que la reclamada actuó dentro de sus competencias, estableciendo el artículo 9 letra a) del Código Sanitario que es función del órgano sanitario: “Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones que lo complementen, y sancionar a los infractores”. Luego, y en lo relativo a si los hechos que motivaron la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario, se seguirá el orden utilizado por la fiscalizadora en la Acta de Inspección de 10 de julio de 2018, dividiéndolo en dos títulos, por corresponder –además- al orden utilizado por el demandante al realizar sus descargos;

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en este orden, si bien el artículo 166 del Código Sanitario en relación con el inciso 2° del artículo 156 del mismo cuerpo de leyes, otorga carácter de plena prueba al acta levantada por el funcionario competente, cuyo es el caso, lo cierto es que su valor probatorio puede ser desplaza por prueba conducente como aconteció en la especie, según se verá:

### **I.- Hechos Constatados**

1.- La empresa no adopta las medidas que le prescribe el Organismo Administrador de la Ley 16.744 para Sílice: en torno a este hecho encontramos el Informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 de fecha 08 de mayo de 2018 y el Informe de Evaluación Cuantitativa N° 1428710 de fecha 14 de junio de 2018, conjuntamente con los informes Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional N° 1513959 y N° 1504472, de los cuales se desprende que – en lo que respecta a este punto- la Asociación Chilena de Seguridad, en la mayor parte de los casos otorgó plazos a la demandante para cumplir las medidas prescritas, encontrándose al momento de la inspección la mayoría de los plazos pendientes, sin perjuicio de lo cual es pertinente poner de relevancia que de acuerdo a las verificaciones de Control de Higiene y Seguridad, al 18 y 24 de julio del año 2018, las medidas propuestas por la autoridad se encontraban en un 74% y 68%



Foja: 1

implementadas, razón por la cual no es posible tener por verificado este hecho.

2.- No se ha evaluado la eficiencia del control ingenieril en la fuente, hecho que tampoco es posible tener por cierto, ya que del punto 4 del informe Cuantitativo N° 1428710, se desprende que la reclamada disponía de un plazo de 3 a 6 meses para cumplirlas y que al 18 de julio una de las medidas estaba cumplida, una en proceso de cumplimiento y otra pendiente; en consecuencia, requiriendo las instrucciones dadas por la autoridad de un tiempo para su implementación –pendiente a la época de inspección- y además un periodo de ejecución para evaluar su efectividad, no siendo posible en este escenario configurar el hecho que nos ocupa; aún más, debemos atender a que en los instrumentos de verificación y control de higiene ocupacional, se consigna que el aumento de la humectación en procesos de chancado y traslado de material se encontraba en proceso, pues la instrucción de la autoridad sobre este aspecto, fue aumentar la humectación en lo posible.

3.- No se presenta evidencia de la efectividad de los controles administrativos para Sílice, también será desechada, pues precisamente el mérito de los informes de Evaluación Cualitativa N°1430100 y Cuantitativa N° 1428710 emitidos por Organismo Administrador, ambos evacuados con anterioridad a la Inspección, evidencian precisamente lo contrario, debiendo añadirse que los respectivos informes Técnicos de Verificación y Control Higiene Ocupacional, permiten concluir que aquellas medidas fueron implementadas.

4.- No se realizó la capacitación teórico práctico de la protección respiratoria: sin perjuicio de que sobre este punto no existe mayor precisión, los registros de difusión a trabajadores faena CERROALTO en Arenex, Instructivo I-GEN-SGS-01, Registros Fotográficos de capacitación, Muestra de Chequeo de Prueba de Ajuste Diario e informe Técnico Verificación y Control Higiene Ocupacional Cuantitativas N° 1513959, permiten establecer que la capacitación teórico práctica si se realizó, debiendo hacerse hincapié en que en la glosa 22 del último documento citado, se tuvo por cumplida la exigencia en comento.



Foja: 1

5.- La empresa no informa al organismo administrador, la implementación de controles o cambios de procesos, maquinarias o materias primas para una re-evaluación de la exposición a ruido: sobre este aspecto se ha de indicar que la recurrente hace mención al informe de evaluación cuantitativa N°1381278 de fecha 01 de Junio de 2018, el cual si bien no aparece incorporado al sumario administrativo y tampoco se acompañó a este proceso, sí es citado en el informe de Verificación y Control, Higiene Ocupacional N°15044343, instrumento en el que precisamente se alude al Informe de evaluación cuantitativa N°1381278, desprendiéndose que no se dispuso ningún tipo de medida ingenieril, razón por la que no se advierte cómo se pudo incurrir en este hecho. De la misma forma, el informe de evaluación en el punto 8 tiene por efectiva cierta información que el órgano requerido entregó, y las cuales resultan coherentes con aquellas indicadas en el Informe Técnico N° 1292243 de evaluación de diagnóstico para la exposición ocupacional a ruido de febrero de 2018.

6.- La empresa no cuenta con informe genérico de los resultados del programa de vigilancia de Salud: cabe descartar este hecho, en tanto del documento emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, cuya copia encontramos a fojas 26 y 27 del segundo documento agregado bajo el folio 34, se adjunta una nómina de 6 trabajadores, detallándose informes periódicos.

7.- No se ejecutan las medidas dentro de los plazos definidos por PREXOR: de conformidad a R-GEN-SGS-08 de enero de 2018, el reclamante se compromete a pedir evaluación, lo que a juzgar por el informe cuantitativo N° 1381278 aquello se materializó, estando incluido su control en el acuerdo de cronograma de implementación Prexor, mencionado en el punto 4 del Informe de Verificación y Control Higiene Ocupacional N° 1504343, documento en el que no se acusa como incumplido, desde que la única medida calificada como no cumplida fue la “obligatoriedad de mantener las puertas cerradas”.

8.- No se controla la exposición mediante alguna medida ingenieril de la(s) fuente(s) de ruido: también debe descartarse la concurrencia de esta infracción, en tanto no fue posible establecer la obligatoriedad de implementar una medida de tal carácter, debiendo observarse que en el



**Foja: 1**

informe de Verificación y Control, Higiene ocupacional N°1504343, no se consigna medida alguna de tipo ingenieril. Por la misma razón debe tenerse como no acreditado que no exista un programa de mantención preventiva de los sistemas de control ingenieril para Ruido.

9.- En 10° lugar sanciona que no presenta evidencia de la efectividad de los controles administrativos para Ruido: este hecho tampoco se tendrá por verificado, en tanto el Informe de Verificación y Control Higiene Ocupacional N° 1504343, alude a 8 medidas de esta naturaleza, constatándose la no ejecución de sólo una de ellas, pero que de acuerdo a las conclusiones a la fecha de la inspección se encontraba con plazo pendiente.

10.- No cuenta con la gestión de los Elementos de Protección Auditiva de acuerdo con las Guías del ISP: este hecho tampoco se constata, ya que el Informe de Verificación y Control Higiene Ocupacional N° 1504343 en el punto 9 contempla como una de las medidas un programa de protección auditiva, anotándose como evidencia el Programa de Protección código R-GEN-SGS-09 de fecha 9 de julio de 2018, el cual rola a fojas 7 del segundo documento agregado bajo el folio 34, instrumento en cuyo título 5° se hace referencia al programa seguido para realizar la selección de la protección auditiva, tomándose en consideración para ello la “Guía para la Selección y Control de Protectores Auditivos del ISP”, incluyendo únicamente elementos que contaran con la debida certificación y efectuándose la correspondiente prueba con los trabajadores expuestos.

Por las mismas razones entregadas precedentemente, y teniendo además presente que en anexo I del referido Programa de Protección Auditiva, se adjunta la ficha de adquisición de equipo de protección auditiva, constando su entrega en la ficha R-GEN-SGS-30 y constándose además la capacitación sobre uso y cuidado de protección auditiva, según se desprende de los Registros de Actividad R-GEN-SGS-11, así como la elaboración de una guía para el control del desempeño del uso de estos instrumentos, lo que se corrobora de la lectura de la Guía R-GEN-SGS-31, no podrá tampoco tenerse como efectivos los hechos 12, 13 y 14, esto es, la afirmación referente a no proporcionar Elementos de Protección Personal adecuados a los requisitos, características y tipos que exige el riesgo Ruido;



**Foja: 1**

la no realizó capacitación teórico práctica sobre la protección auditiva de acuerdo a la Guía del ISP, así como tampoco la no realización de capacitación sobre los efectos de la salud que produce el ruido ocupacional, las medidas preventivas ni los métodos de trabajo correctos.

Sobre todos los hechos abordados en este numeral, haremos hincapié en que en el punto 8 del anexo 1 del Informe de Verificación y Control Higiene Ocupacional N°1504343, se lee la instrucción dada al reclamante en orden a seguir abasteciendo a sus trabajadores de los elementos de protección necesaria; destacándose como evidencia el Registro de entrega de tales elementos, así como también la difusión de programas de protección auditiva, materializados los días 14 de junio y 4 de julio de 2018. Finalmente, sobre los aspectos tratados se ha de traer a colación lo razonado a propósito de las capacitaciones relacionadas con el protocolo PREXOR.

11.- No se realizó la difusión del protocolo a los Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sindicatos ni trabajadores con exposición a Ruido, así como no informar a los mismos sujetos de derecho de los resultados de las evaluaciones cuantitativas de Ruido: en torno a estos hechos se ha de tener presente que de conformidad al artículo 66 de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la existencia de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad únicamente es posible en aquellas industrias o faenas en que trabajen más de 25 personas, presupuesto que en la especie el reclamante niega, y que de los Registros de Capacitación de Resultados de evaluaciones cuantitativas a trabajadores, elaborados por la demandada y reconocidos en juicio por quienes participaron en su confección ratifican, pues en ninguno de ellos se estampan las firmas de más de 12 trabajadores, por otro lado no es posible obviar que en el Informe Técnico de Evaluación Cuantitativa N° 1430100 el número de trabajadores cuya exposición se evalúa ascendía a 21. Asimismo, y aunque de conformidad a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 19.069 sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, es posible constituir sindicatos en empresas con menos de 50 trabajadores, la imprecisión en la descripción del hecho, en el que además de utiliza la voz “sindicatos”, unida a la ausencia de elementos que nos lleven a concluir positivamente sobre la



**Foja: 1**

existencia de un número de trabajadores suficientes como para poder constituir este tipo de organizaciones, y reiterando lo relativo a la difusión del Protocolo Prexor a los trabajadores de la demandante, impiden tener por establecido este hecho.

**II.- Otros hechos**

A continuación el fiscalizador desarrolla un segundo párrafo de hechos constatados, sin mencionar las normas que estima infringidas, aspectos sobre los cuales se ha de indicar lo siguiente:

1.- Falta implementar medidas de control ingenieril en salida polvo roca de la planta: esta imputación no logra constatarse, en tanto del informe de Evaluación Cualitativa N°1430100 e informe de Evaluación Cuantitativa N° 1428710, puntos 3 y 4, respectivamente, dan cuenta que los plazos otorgados por la autoridad para cumplir las instrucciones se encontraban pendientes, circunstancia que hace improcedente la imputación de una falta en torno a este aspecto.

2.- Falta implementar señaléticas en la planta acerca del riesgo de exposición al agente sílice y uso de epr: también ha de descartarse la configuración de este hecho, pues el registro fotográfico acompañado en la etapa administrativa (rolante a fojas 12 y 14 del segundo documento ingresado bajo el folio 39 de la carpeta digital) da cuenta del cumplimiento de estas instrucciones; a lo expuesto, añadiremos todo lo razonado en torno a la entrega de elementos de protección de salud. Seguidamente, y en base al mismo registro se descartará que falte implementar señalética de prohibición de ingreso de personal no autorizado a la zona de chancado, según se desprende las fotografías de fojas 99 del documento añadido bajo el folio 34.

3.- Falta implementar programa de protección respiratoria y su difusión a todos los trabajadores, además debe evidenciar las pruebas de ajustes realizadas, según método seleccionado en instructivo de pruebas de ajustes: tampoco es posible configurarlos, en atención a que el “Programa de Protección Respiratoria” R-GEN-SGS-11 y el Instructivo asociado de “Prueba de Ajuste Equipo Protección Respiratoria” R-GEN-SGS-01, hacen prueba de su implementación y difusión; debiendo agregarse que los antecedentes de ajuste han sido registrados en “Chequedo de Prueba de



Foja: 1

Ajuste Diario “R-GEN-SGS-35” y en el instructivo de “Prueba de Ajuste Equipo Protección Respiratoria” R-GEN-SGS-01, todo lo cual ha quedado registrado en los informes de Verificación y Control Higiene Ocupacional Cualitativo N° 1513959 y Cuantitativo N°1504472.

4. Falta realizar difusión a los trabajadores acerca del programa de protección auditiva: al efecto, mencionaremos que el programa consta en la guía R-GEN-SGS-09, desprendiéndose también la verificación de aquella actividad del Registro P-GEN-SGS-11.

5.- Falta realizar difusión del PREXOR a los trabajadores de plantas: tampoco es posible tener por cierta una falta en este orden, pues la actividad de difusión consta en múltiples formularios R-GEN-SGS-11, de mayo y junio de 2018, siendo posible advertir –además- la existencia de un documento denominado Capacitación de Protocolo Prexor a trabajadores expuestos.

6.- Falta implementar sistema de Gestión para vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido: esta omisión tampoco es posible tenerla por cierta, pues del mérito del Sistema de Gestión para la Vigilancia de los Trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a Ruido R-GEN-SGS-08, Actas de entrega a Seremi de Salud y Registro R-GEN-SGS-11, fluye la implementación de un sistema de gestión de vigilancia.

7.- Falta implementar zonas de descanso, debidamente señalizadas y sistemas de rotación: este hecho que tampoco se constata, por cuanto consta que el reclamante implementó sala de descanso, así en la página 3 del registro código R-GEN-SGS-09 aparece la zona de descanso con la señalización pertinente, lo que también se desprende del Procedimiento de Monitoreo Planta de Chancado P-ARE-CHA-02 y del Informe Técnico de Aplicación de Medidas de Control de Sílice y Ruido;

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, sin perjuicio de lo expuesto, razonado y concluido en el considerando que antecede se ha de tener presente que la mayor parte de los hechos constatados en la fiscalización de 10 de julio de 2018 quedaron desacreditados con el tenor de los Informes Técnicos N° 1428710 y N° 1430100, así como con el mérito de lo que este tribunal ha podido conocer del Informe Técnico N° 1381278, todos



**Foja: 1**

elaborados por la Asociación Chilena de Seguridad, durante los meses de mayo y junio de 2018, pues de ellos se lee que la mayor parte de las medidas estaban siendo objeto de control por parte de la autoridad administrativa; constatándose –además- la existencia de un Informe Técnico de 28 de febrero de 2018, cuyas medidas también habían sido cumplidas o se encontraban con plazo pendiente.

Los restantes documentos corresponden en general a instrumentos emitidos por el propio reclamante con anterioridad a la inspección, algunos de ellos reconocidos por el testigo de la parte demandante Quiroga, y todos ellos considerados en los Informes de Verificación y Control Higiene Ocupacional N° 1504343, N° 1504472 y N° 1513959, expedidos por el Organismo ya mencionado durante los días 18 y 24 de julio de 2018, de los cuales se colige el cumplimiento de medidas que inciden en la configuración de los hechos constatados por la recurrida, aún antes de cumplirse los plazos otorgados al efecto. De tal forma que, todos estos instrumentos -de la manera en que se pormenoriza en el considerando que antecede- tienen el efecto de destruir el valor probatorio que el artículo 166 del Código Sanitario en relación con el inciso 2° del artículo 156 del mismo cuerpo de leyes otorga al acta extendida por el correspondiente fiscalizador;

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en consecuencia, forzoso es concluir que los hechos que motivaron la sanción no se encuentren acreditados, dándose de aquella forma uno de los presupuestos que, conforme dispone el artículo 171 del Código Sanitario, autoriza a dejar sin efecto la Resolución Multa N° 191325 de 23 de enero de 2019 dictada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud.

Finalmente, sobre la efectividad de los hechos que se dieron por establecidos durante el sumario sanitario, mencionaremos que en esta sede la labor del tribunal se vio dificultada, por cuanto la ausencia de justificación de la resolución recurrida en torno a los descargos de la demandante de autos, impidió conocer las razones que se tuvieron a la vista para desechar la prueba presentada por esta última, las que a juicio de quien suscribe tenían la entidad suficiente como para tener por cumplidas





Foja: 1

las exigencias que las autoridad impuso en su momento a la empresa sancionada;

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la demandada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto el artículo 76 de la Ley N° 16.744; artículo 3, 36 y 37 del D.S N° 594 del año 1999; artículos 1698 y 1706, del Código Civil y 170 y siguientes del Código Sanitario; 160, 170, 341, 342, 346, 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Se rechazan las inhabilidades deducidas por la parte reclamada en contra de los testigos Julio Norman López Guerrero, Kevin Aarón Báez Valenzuela y Leonardo Daniel Quiroga.

II.- Se acoge el reclamo deducido por Minería y Construcciones Cerro Alto Limitada, y en consecuencia se deja sin efecto la multa impuesta por resolución exenta N° 191325, de fecha 23 de enero de 2019.

III.- Se condena en costas a la demandada.

**Notifíquese, dese copia y archívense en su oportunidad.**

**N° 7260-2019**

Pronunciado por doña Carolina Andrea Ramírez Reyes, Juez Titular.



